

LA ALTERNATIVA DE LA DERECHA (1996-2000)*

Javier Tusell
UNED

El resultado de las elecciones generales celebradas en marzo de 1996 constituyó una sorpresa para la mayor parte de los observadores. A pesar de la oleada de escándalos que se habían producido al final de la etapa socialista, la diferencia entre los dos grandes partidos fue de tan sólo unos trescientos mil votos de modo que el PP quedó muy lejos de la mayoría absoluta. Por su parte Izquierda Unida tan sólo incrementó en tres diputados su minoría de modo que la teoría de las "dos orillas", enunciada por Anguita para recalcar la impecabilidad moral propia, acabó orillando a quien la había defendido. Los nacionalistas mantuvieron su fuerza pero, además, hizo acto de presencia parlamentaria un galleguismo nuevo y remozado, de procedencia izquierdista. La explicación de estos resultados se encuentra probablemente en el hecho de que la propia verosimilitud de la victoria del PP, que todavía ofrecía muestras repetidas de intemperancia y de conservadurismo, acabó por provocar que el electorado situado más al centro le restara un número considerable de votos. El resultado de las elecciones de 1996 pudo ser tan "dulce derrota" para quienes perdieron como "amarga victoria" para quienes ganaron; en lo que unos y otros estuvieron desde un principio de acuerdo fue en que quedó inaugurada una nueva etapa en la política española.

* N. del E.: Todas las pruebas de imprenta de esta ponencia han sido corregidas por el editor de las actas.

1. Aznar y sus gobiernos

Se ha solido decir que uno de los errores del PSOE con respecto al PP fue infravalorar a Aznar. No se trata de exactamente eso sino de que no supo situarlo en el lugar que le correspondía en la Historia política de España. Esta ubicación debía haber sido la correspondiente a una nueva generación en la vida pública española con puntos de partida y experiencias vitales muy distintas de la anterior. La generación de los sesenta vivió la experiencia de la transición, llegó al poder pronto y estaba ya a mediados de los noventa camino a la amortización para la primera fila de la política. Para la nueva generación la transición no era un momento biográfico ni un esfuerzo colectivo sino un dato de la realidad. Había vivido la política como una profesión que consistía sobre todo en confrontación con los socialistas durante unos años en que la esperanza de la alternativa parecía remota; esa temprana profesionalización y la confrontación marcaron rasgos indelebles en su forma de actuación.

Siempre es necesario aludir a los datos biográficos personales o colectivos para explicar una determinada política pero eso resulta necesario de forma especial al tratar, como en este caso, de un relevo generacional. Lo que interesa primordialmente de Aznar como personaje político es su capacidad de supervivencia a pesar de no ser tomado en serio con mucha frecuencia y de haber pasado por dificultades repetidas a lo largo de su carrera. Una de sus recetas parece haber sido "paciencia, prudencia y perseverancia" y constituye una óptima fórmula política. A ella sumó el "sentido del poder", es decir, la capacidad para descubrir donde estaba éste —en el partido, por ejemplo— y retenerlo por completo en sus manos. Para ello hizo un buen uso de su "política de personal" actuando, como recomendaba un político británico, "como carnicero" en la liquidación de la antigua clase dirigente de su partido y "como homeópata" en el reparto del poder interno de su partido. Eso a menudo mermó la calidad de sus colaboradores mientras que la dificultad de su carrera política provocó en él cierta tendencia paranoica. En cuanto al bagaje ideológico con el que accedió al ejercicio del poder fue el característico de la derecha clásica trasmutada hacia el liberalismo thatcheriano a partir de comienzos de los ochenta y sólo derivada hacia un cierto centrismo en la etapa final de la oposición.

Con la victoria electoral no habían concluido los problemas de Aznar que temió que se recurriera a otra persona en el seno del PP para sumar los imprescindibles votos parlamentarios. Pero esta prevención careció siempre de sentido puesto que

hubiera sido imposible que el PP aceptara otro Presidente mientras que los catalanistas siempre estuvieron dispuestos a pactar con el ganador. El punto de partida en las relaciones entre PP y CIU era muy malo de modo que fueron necesarios dos meses de conversaciones hasta que a finales de abril de 1996 se llegó a un acuerdo que fue escrito y pormenorizado. Rodrigo Rato, futuro vicepresidente económico, fue su negociador lo que revela que la mayor parte de su contenido era de ese carácter; también, sin embargo, se refería al Estado de las Autonomías, con la determinación de un nuevo modelo de financiación y la supresión de los gobernadores civiles, o al servicio militar. El pacto fue recibido con optimismo: daba la sensación de que por vez primera la derecha española estaba en condiciones de integrarse con los nacionalismos periféricos. A la investidura de Aznar contribuyeron también los votos del PNV y de los nacionalistas canarios.

La formación del gobierno no fue complicada aunque trajo algunas sorpresas. Siete de los ministros procedían de AP como también los dos vicepresidentes mientras que sólo tres habían tenido militancia en UCD y otros tres eran independientes. Aznar dijo que el primer propósito del gobierno era "durar", lo que parecía un propósito muy poco ambicioso pero que se explica por lo corto de la ventaja electoral y las dificultades existentes en el logro de la mayoría parlamentaria. Una vez formado y a pesar de que pronto se demostró la bisonñez o ignorancia de algunos de sus miembros, le costó mucho modificarlo incluso a pesar de que en algún caso le proporcionaban conflictividad gratuita y repetida. En julio de 1998 sustituyó a Miguel Ángel Rodríguez que había protagonizado, como portavoz del gobierno, no sólo una política informativa muy digna de críticas por su zafiedad y abuso del poder del Estado sino también conflictos con los catalanistas. A partir de este momento, en un giro político importante pero que no acabó de perfilarse de modo definitivo, volvió a defender, como había hecho en la campaña electoral, la necesidad de una renovación hacia el centro del espectro político. Álvarez Cascos, que como vicepresidente político había contribuido al mantenimiento de buenas relaciones con el PNV pero también representado un tipo de actitud de derecha clásica, vio decrecer su papel. A fines de 1998 Aznar destituyó a López Amor, otro ejemplo de la política de confrontación, de sus responsabilidades al frente de RTVE mientras que Álvarez Cascos era marginado progresivamente de sus responsabilidades también en la vicepresidencia política. A principios de 1999 llevó a cabo, por fin, el relevo ministerial que había venido imponiéndose como una necesidad. Arenas ocupó la secretaría general del partido mientras Rajoy intentaba pacificar los conflictos provocados por

Aguirre en Educación y Cultura. Más adelante Posada sustituyó a Loyola de Palacios, tras haber sido ésta nombrada comisaria europea.

Antes de tratar de la oposición, imprescindible contrapunto del gobierno, conviene examinar cómo fue evolucionando la opinión pública de cara al ejecutivo y a aquélla. La victoria del PP se explica en el contexto de un desfondamiento generalizado desde 1993 de las expectativas en la percepción de la situación, tanto en el terreno económico como en el político. Desde la llegada al poder del PP ambas percepciones cambiaron, en especial la relativa a la situación económica al margen de que la recuperación se hubiera iniciado en plena etapa socialista. Lo curioso es que este hecho no pareció beneficiar a corto plazo al partido del gobierno quien, una vez llegado al poder, sólo se mantuvo unos cuantos meses por delante de los socialistas en expectativa de voto; luego éstos les sobrepasaron y de nuevo se repitió la situación cuando Borrell estuvo al frente de su candidatura. Pero la "llovía fina" de la prosperidad económica se impuso con el transcurso del tiempo y acabó por convertirse en un auténtico aguacero en la recta final de las elecciones del año 2000.

Las consultas electorales celebradas hasta entonces confirman este proceso. Ya en otoño de 1997 el PP revalidó la mayoría absoluta por tercera vez en Galicia, por más que creciera el nacionalista BNGA. En el País Vasco las elecciones, celebradas bajo el impacto de la tregua de ETA, permitieron el crecimiento de EH pero también el del PP que casi duplicó sus votos y logró cinco escaños más. De todos los modos ésas fueron elecciones regionales que sólo permitían captar el sentido de la evolución de la opinión en una parte de la geografía peninsular. De las elecciones europeas, municipales y autonómicas de junio de 1999 cabe concluir, en líneas generales, que el PP obtuvo peores resultados que en las anteriores del mismo tipo pero mejores que en las generales de 1996, exactamente lo contrario que el PSOE. Finalmente las elecciones de octubre de 1999 en Cataluña proporcionaron la novedad de que por vez primera se plasmaba en la realidad una posibilidad que la ley electoral española dejaba abierta: la de que por el número de sufragios venciera una opción que, sin embargo, quedaba atrás en el número de escaños por la sobrerrepresentación de las circunscripciones menos pobladas. Los socialistas pusieron, por tanto, en muy serio peligro el gobierno de los nacionalistas, hasta ahora casi indisputado. Pujol debió en adelante apoyarse en el PP para mantenerse en el poder.

La oposición, mientras tanto, vivió las inevitables consecuencias de la "dulce derrota", es decir, un exceso de confianza en sí misma como alternativa. Felipe González, que siempre demostró una dificultad casi visceral para entenderse con Aznar o apreciar sus capacidades, seguía siendo decisivo para su partido y además se mantuvo por encima del presidente de Gobierno en su popularidad. Sin embargo, en junio de 1997, como para demostrar que era veraz su deseo, tantas veces expresado, de retirarse del primer plano de la política abandonó la secretaría general de su partido y provocó también la retirada de Guerra, superviviente como él del Congreso de la renovación en la ciudad francesa de Suresnes.

Quien le sustituyó fue Joaquín Almunia. Era un personaje intachable y de peso específico que suponía la continuidad en lo que respecta al género de socialismo que González había representado en el poder pero también parecía poder iniciar una renovación. Sin embargo careció de carisma y atractivo electoral y tuvo en su contra el recuerdo de la etapa final del gobierno socialista con su acumulación de escándalos; tampoco llegó a renovar el mensaje programático. Tomó, sin embargo, dos decisiones de entidad aunque ninguna de ellas proporcionó éxitos a corto plazo. La primera fue, a fines del año 1997, aplicar el sistema de las primarias para la elección del líder. Se trató de una medida destinada a apuntalar su liderazgo pero, contra todo pronóstico, en abril de 1988 Almunia perdió ante Borrell. Éste proporcionó durante meses al PSOE la esperanza de ser capaz de vencer a Aznar pero su impacto en las encuestas de opinión resultó efímero. Cuando se planteó el debate sobre el Estado de la Nación Aznar le derrotó claramente y, además, la bicefalia en el partido –Almunia había permanecido al frente de la secretaría general– resultó enormemente contraproducente. Borrell, cuya situación a la izquierda del espectro socialista ya le convertía en un candidato poco viable, supo retirarse cuando se descubrió que alguno de sus colaboradores en el Ministerio de Hacienda estaba implicado en graves fraudes.

Problemas de distinta índole que el PSOE sufrió IU, abocada a escisiones como consecuencia de la incapacidad de Anguita para rectificar un rumbo que había dado muy mal resultado. Nueva Izquierda, surgida de la discrepancia de gran parte de sus líderes más conocidos, no llegó, sin embargo, a tener verdadera entidad de modo que pronto fue un mero satélite del PSOE. La consecuencia fue el goteo del voto: ya en 1997 IU valía desde el punto de vista electoral la mitad que en 1996. Cuando llegaron las elecciones, con Anguita enfermo, Almunia pensó que no

podía galvanizar a su electorado sino por el procedimiento de una ducha escocesa de un pacto con IU. Esta fue su segunda gran decisión pero, como veremos, a corto plazo tuvo, para él, más inconvenientes que ventajas.

2. Política económica y social

La recuperación económica tras la crisis de 1993 se había iniciado, aunque sólo con titubeos, en 1994 siendo responsable de la política económica el socialista Solbes. Rato, al frente de la política económica del PP, logró unos resultados muy apreciables. El crecimiento anual medio fue del 3,5%, muy superior tanto al secular como al obtenido desde el momento del establecimiento de la democracia en España (2% en ambos casos). Quizá lo más característico del período haya sido, sin embargo, más que el volumen del crecimiento el mantenimiento de una gran estabilidad macroeconómica. Hubo, en efecto, contención de precios, salvo al final de la legislatura, rebaja de tipos de interés, reducción del déficit y disminución de la deuda pública, cuatro rasgos óptimos para testimoniar lo sano del crecimiento logrado. Sin duda la coyuntura internacional ayudó de una forma muy evidente a la obtención de este resultado al estar la economía norteamericana impulsada por la llamada "nueva economía" y gracias, también, a la prudente política de la Reserva Federal y al renovarse sustancialmente las esperanzas puestas en la solidez económica de la Unión Europea.

El dinamismo de las exportaciones junto con el consumo y la inversión privados fueron los grandes dinamizadores del proceso de crecimiento español. Fue, pues, también en este aspecto, un crecimiento sano, no debido a otros factores ajenos a la economía propiamente dicha como pudiera ser la intervención estatal. Pero sin duda también la política económica seguida jugó un papel importante en ese resultado. En primer lugar consiguió la estabilidad a pesar de que los precios mantuvieron todavía un considerable diferencial con respecto a los países europeos. Por otro lado la reforma laboral, a partir de 1997, fomentó la creación de empleo de modo que fueron creados dos millones de nuevos puestos de trabajo. La tasa de paro pasó, por tanto, del 23 al 15%; en gran parte se debió a la creación de un nuevo empleo de fomento de menor indemnización por despido. Otro elemento distintivo de la economía española durante el período fue la apertura al exterior no sólo gracias al dinamismo de las exportaciones sino sobre todo a la internacionalización de las empresas españolas. Desde 1997 las inversiones

directas de España superaron a las realizadas en ella. Un cuarto rasgo de la política económica del período estuvo constituido por la recomposición de los grandes grupos de poder económico.

Sobre este particular es necesario referirse a las privatizaciones, una ingente desamortización que superó en valor los cuatro billones de pesetas entre 1996 y 1999. Lo significativo y más controvertido de ellas fue que los presidentes de las compañías privatizadas siguieron siendo los en su día nombrados por el gobierno de modo que se configuró un grupo empresarial situado en sus aledaños. Una parte de su poder económico fue empleado para configurar un grupo de medios de comunicación adicto a él. La realidad es que esas privatizaciones dieron unos muy magros resultados en términos de competencia y eficiencias reales que amortiguaron los descensos en precios y tarifas. Además esta situación se produjo en un momento de prosperidad económica cuando esas reformas hubieran sido más fáciles. De cualquier modo la empresa española experimentó un proceso de concentración configurándose grandes grupos, como BBVA y BSCH, Repsol, Endesa y Telefónica, de dimensión mundial. A la altura del año 2000, por más que fuera patente la necesidad de mantener la flexibilización económica y el estímulo de la competencia, la economía española ofrecía unas perspectivas inmejorables mientras se recortaba la distancia con respecto a Europa.

Por otra parte la política social seguida, complemento de la económica, supuso una legitimación social de un nuevo gobierno sobre el que se habían acumulado sospechas de intentar desmontar el Estado de Bienestar creado principalmente durante el período político anterior como consecuencia de la obra del gobierno socialista. La política del Ministerio de Trabajo tuvo, en contra de las previsiones de la izquierda, un declarado corte centrista buscando el acuerdo con los sindicatos y los patronos. Gracias a una política de parecido corte en el período anterior se había llegado a una primera reforma laboral en 1994; ahora, en cambio, se logró otra en 1997 en la que se pretendió no tanto crear empleo a cualquier coste como mejorar la calidad del empleo conseguido variando los tipos de contrato. El gobierno actuó siempre por el procedimiento de favorecer el diálogo entre los sindicatos y los empresarios y presionar para que llegaran a un acuerdo. De esta manera se concedió el protagonismo a los agentes sociales a diferencia de lo sucedido en los acuerdos anteriores. Una consecuencia adicional, al margen de sus contenidos, de los pactos suscritos en 1997 y 1998 fue la disminución de la con-

flictividad laboral tanto en volumen como en dureza de la confrontación. Además se establecieron nuevos procedimientos para la evitación de los conflictos mediante arbitraje.

El incremento de la ocupación durante el cuatrienio se debió sobre todo al del trabajo asalariado en el sector privado. El paro seguía afectando en el año 2000 principalmente a la mujer y los jóvenes y subsistía también un volumen muy considerable de desempleo de alta duración. Durante el primer período de gobierno del PP descendió la tasa de cobertura del paro aunque aumentara el gasto medio por beneficiario. Al margen de que la tasa de actividad española era muy baja en relación con la europea, otro rasgo distintivo (y muy poco positivo) del mercado de trabajo español era la fuerte tasa de siniestralidad.

En otros terrenos de la política social el resultado de la acción gubernamental fue mucho menos positivo. El PP utilizó la sanidad en la oposición como arma arrojadiza pero sin definir un modelo propio. En el poder este partido llevó a cabo una política vacilante introduciendo reformas tan importantes como las fundaciones públicas sanitarias por el procedimiento de incluirlas en la ley de acompañamiento de los presupuestos al ser incapaz de pactarlas con la oposición. En materia de pensiones en 1995 se había llegado al acuerdo de Toledo y la cuestión no se planteó en los términos ásperos que en el pasado. La bonanza económica permitió un incremento de las pensiones por encima de la inflación; además, por idéntica razón, se produjo una reducción del déficit de la Seguridad Social y el número de afiliados pasó de doce millones y medio a catorce millones y medio.

Sin embargo en este terreno quedaban no pocas cuestiones pendientes y a ellas hubo que sumar otras nuevas. No se produjo, por ejemplo, una disminución significativa de la desigualdad social: pese al crecimiento económico en España un 22% de la población podría ser situada en el umbral de pobreza de acuerdo con los criterios empleados en la Unión Europea. Además en estos años tuvo lugar la primera aparición de brotes de violencia xenófoba (El Ejido y Tarrasa, 1999). En esta materia cabe levantar acta del peor error del PP en política social. Después de consensuar una ley de inmigración aceptable para todos los grupos por influencia del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Interior, dio marcha atrás provocando la dimisión de Pimentel, el ministro que había sustituido a Arenas en Trabajo.

3. Entre la continuidad y la discontinuidad

Probablemente las políticas hasta el momento tratadas fueron las que proporcionaron al PP más votos y más grado de satisfacción en la opinión pública. En las restantes puede decirse que la política seguida osciló entre la continuidad y la discontinuidad al mismo tiempo que se padecieron las consecuencias de la dudosa calidad de los gestores, de su inadecuación al puesto que les había correspondido o de una voluntad abusiva de transformar la realidad social con la que el PP se había encontrado al llegar al poder.

En materia educativa resulta difícil encontrar un aspecto en que el PP haya dejado auténticos motivos de satisfacción al conjunto de la sociedad española. La imprudencia y carencia de criterio de la ministra Esperanza Aguirre, aun dotada de una evidente simpatía y buen trato, unida a su excesiva ideologización en sentido liberal y el carácter heterogéneo de su equipo convirtieron en muy desafortunada su gestión. En materia universitaria muy pronto se enfrentó con los rectores y con su propio Secretario de Estado al que acabó cesando. Las únicas medidas aprobadas lo fueron en la rectificación de rumbo introducida por Rajoy y se refirieron a aspectos no tan decisivos (selectividad y distrito abierto). La reforma de las Humanidades, intentada sin un acuerdo previo y sin un estudio de la realidad docente, acabó naufragando ante la oposición de nacionalistas y socialistas.

En materia cultural la política seguida por el PP se caracterizó por una sobrecarga ideológica, una vocación pendenciera y una pretenciosidad excesiva teniendo en cuenta la capacidad efectiva de sus gestores. Hay que reconocer, sin embargo, que con el paso del tiempo, todos estos rasgos tendieron a moderarse y lo hicieron definitivamente en la etapa ministerial de Rajoy. El balance fue, sin embargo, mediocre. A pesar de que el presidente del Gobierno pretendió ejercer como una especie de viceministro de Cultura los presupuestos se estancaron. El Museo del Prado se embarcó en una conflictiva ampliación mientras que sus procedimientos de gestión se complicaban eligiendo un rumbo impensable en otros museos del mundo. Hubo frecuentes conflictos gratuitos con la industria del cine y del libro. Se rompió el consenso en lo que respecta al Teatro Real y no se fue capaz de resolver algunos problemas graves con las autonomías. Lo más positivo de la gestión del PP cabe encontrarlo en algunas iniciativas muy concretas de exposiciones.

También en el caso de Justicia la capacidad de la titular del departamento estuvo muy por debajo de las responsabilidades del cargo. Incapaz de llegar a un acuerdo con la oposición, la Ministra dio un pretendido carácter más profesional al fiscal pero pronto se descubrió que tenía muy poco de imparcial. Tampoco los recursos crecieron en la medida en que era necesario ni se resolvió el grave problema de la lentitud de la justicia. La creación del Ministerio de Medio Ambiente fue una medida positiva pero tampoco la ministra Tocino estuvo a la altura de las circunstancias por sus conocimientos e incluso por su talante. Aunque hubo algunas medidas positivas el nuevo Ministerio acabó con un balance decepcionante por su propia inestabilidad interna –hasta cinco jefes de prensa se sucedieron en él– y la conflictividad gratuita con las entidades defensoras del medio ambiente.

En ninguna materia fue tan patente la voluntad de discontinuidad, mezclada con una gestión inhábil, prepotente y pendenciera, como en los medios de comunicación. El gobierno del PP desde muy pronto se enfrentó con el grupo Prisa, cosa que nada tiene de particular por el carácter de centro-izquierda que le era atribuido. Lo peculiar e inédito fueron los medios utilizados en su contra. En primer lugar se pretendió la creación de una única plataforma digital en que debieran integrarse todas las posibilidades de negocio en esta materia utilizando para este propósito todos los recursos legislativos posibles. Con ser eso inaceptable todavía lo fue más que Telefónica, empresa recién privatizada, se dedicara a configurar un grupo de medios cercanos al poder comprando emisoras de televisión y radios. Finalmente a comienzos de 1997 un periodista de extrema derecha denunció supuestas ilegalidades en Canal Plus, una de las empresas de Prisa; parece evidente que tuvo no sólo la simpatía sino también el apoyo de determinados medios oficiales. La cuestión carecía de cualquier fundamento: tan es así que el juez, emparentado con el citado periodista, acabó condenado por prevaricación en octubre de 1999. Con el paso del tiempo hubo una cierta rectificación en la política de medios de comunicación, aunque se explique en gran medida por la satisfacción a la que se había llegado en las ansias de obtener medios propios. Fue ella la que permite explicar la marginación de Miguel Ángel Rodríguez y el papel decreciente en el Gobierno y en el partido de Álvarez Cascos. En cambio hubo una absoluta continuidad en la utilización de los medios de comunicación públicos en beneficio del poder mientras que la situación económica de RTVE empeoraba, se evitaba cualquier tipo de reforma legislativa acerca del particular y los contenidos se achacaban al mismo ritmo que en las televisiones privadas.

En el caso de la política exterior no cupo atribuir desconocimiento o incompetencia a Abel Matutes y además en muchos aspectos hubo continuidad en la política seguida. España, por ejemplo, mantuvo una decidida voluntad de participar en la unión monetaria europea y consiguió ver cumplido este propósito como el resto de los países europeos con excepción de Grecia; también defendió los fondos estructurales y de cohesión. Al mismo tiempo hubo una inflexión más atlantista que de cercanía a los grandes países europeos; el acercamiento a Gran Bretaña, a pesar de las divergencias ideológicas con su ejecutivo, se puede interpretar como un resultado de la búsqueda de un aliado entre países de similar peso. Otra discontinuidad en un sentido más bien positivo puede ser encontrada en el papel desempeñado por España en Iberoamérica en donde se convirtió en el primer inversor europeo y segundo del mundo. Pero esta mayor presencia se vio acompañada por problemas nacidos de la sobrecarga ideológica (Cuba) o de la ambigüedad con la que se abordó el problema judicial de Pinochet. La mayor presencia española en Iberoamérica pudo también producir en algún caso sensación de prepotencia entre otros motivos porque a menudo resultó sobredimensionada por los gestores políticos.

La política de Defensa fue marcada por un deseo de continuidad que el propio nombramiento de Eduardo Serra, colaborador del ministro de Defensa socialista, revela y que puede haber sido inspirada desde las alturas. La plena integración en la OTAN (noviembre de 1996) se entiende desde esta perspectiva; la medida no contó sino con la oposición de los sectores situados en la extrema izquierda del espectro político. La supresión del servicio militar ya había figurado en el programa de algunos partidos políticos, como el CDS, y fue introducida en el programa gubernamental como consecuencia de los pactos con CIU. El problema muy pronto residió en el coste y la falta de efectivos del Ejército profesional más que en cualquier otro inconveniente.

4. La España plural

Conviene englobar en este epígrafe dos cuestiones diferentes aunque conectadas: por un lado la política autonómica y por otro la evolución de la política en tres nacionalidades en las que tiene un ritmo propio y peculiar aunque también adquiera una dimensión importantísima para el conjunto de España en el caso del País Vasco por la incidencia del terrorismo.

Durante la primera etapa del gobierno del PP se llevó a cabo la ejecución de los pactos autonómicos suscritos durante la etapa socialista mediante una Ley de Transferencia a las comunidades y la posterior reforma de los Estatutos. Gracias a estas disposiciones el PP traspasó un billón de pesetas y unos 180.000 funcionarios a las Comunidades Autónomas. Los traspasos fueron especialmente importantes en materia de educación y de esta manera las Haciendas de las Comunidades Autónomas avanzaron hasta suponer el 35% del gasto público en España. La financiación económica, cuestión siempre conflictiva e irresuelta, fue objeto de un acuerdo en 1996 que supuso la introducción de la corresponsabilidad, es decir, de la capacidad de decisión en cuanto al incremento o disminución del impuesto, aparte de un incremento de hasta el 30% en la cesión del IRPF.

En cuanto a lo sucedido en las nacionalidades históricas la evolución política y social más decisiva desde el punto de vista del conjunto de los españoles fue, sin duda, la que tuvo lugar en el País Vasco. Desde hacía tiempo empezaba a esbozarse allí un cambio político. Los partidos políticos nacionalistas habían obtenido hasta el momento entre el 46 y el 56% de los votos pero en las elecciones de 1996 los de ámbito español superaron a aquellos tanto en votos como en escaños. El PNV votó afirmativamente en la investidura de Aznar a cambio de un acuerdo que suponía la devolución del patrimonio incautado en la guerra civil y la presencia de Euzkadi en la Unión Europea pero excluía de forma precisa el problema del terrorismo. El acuerdo dejó en una situación muy cómoda al PNV que, al mismo tiempo, contaba con el PSOE en el gobierno vasco. El pacto se tradujo en la práctica por una mayor sintonía con Aznar –o con Álvarez Cascos– mientras que el crecimiento del voto del PP en el País Vasco establecía una competición con él que degeneró poco a poco en confrontación. En parte se explica por el atractivo electoral de Mayor Oreja en quien se daba, además, la condición de Ministro del Interior.

Como tal consiguió mejorar la eficacia policial de modo que en los ocho primeros meses de 1998 ingresaron en la cárcel tantos etarras como entre 1995 y 1997. A la presión policiaca se sumó la judicial. A fines de 1997 los dirigentes de HB ingresaron en prisión por un auto judicial aunque la sentencia luego sería anulada por el Tribunal Constitucional. La presión por ese mismo cauce llevó al cierre del diario "Egin" y al desmantelamiento de la red de empresas que servía para la financiación de HB. La capacidad de acción de los terroristas tendió a mantenerse aunque dentro de unas cifras de víctimas modestas: en 1996 hubo cinco ase-

sinatos y en 1997 doce. El impacto en la opinión pública fue, sin embargo, tremendo por la sensación de impotencia o por la especial crueldad de los secuestros –Ortega Lara– o asesinatos de concejales del PP. La reacción popular –reunida en el Foro de Ermua– pronto se vertebró en una asociación y empezó a polemizar no sólo con HB sino con el nacionalismo que le respondió con dureza semejante.

En este clima se produjo un cambio de estrategia del PNV. Ya desde 1996 Ardanza había indicado la necesidad de avanzar hacia una segunda fase de la pacificación y a comienzos de 1997 hizo mención al "ejercicio paulatino de la autodeterminación". Bien fuera porque el PNV temiera que la derrota de ETA llevara a la del nacionalismo vasco en su conjunto o porque considerara que la situación convertía en posible el definitivo camino hacia la paz se lanzó a una política nueva. Sus antecedentes consistieron en el establecimiento de una estrecha relación entre los sindicatos ELA, cercano al PNV, y LAB, próximo a HB. En marzo de 1998 un plan de paz enunciado por Ardanza propuso una solución dialogada en un marco de paz y partiendo de la premisa de que el problema era entre vascos y no entre Euzkadí y España. Este plan se rechazó demasiado pronto y en el verano los socialistas abandonaron el gobierno vasco. En esa misma estación los partidos nacionalistas suscribieron la declaración de Barcelona que suponía una colaboración como la que ya tuvieron en los años veinte y treinta.

En septiembre se firmó un acuerdo de Estella entre todos los grupos nacionalistas e inmediatamente ETA, que había mantenido conversaciones con el PNV, inició una tregua. El inconveniente del pacto fue que, aparte de evitar cualquier referencia a la legitimidad del marco estatutario, desde un principio tuvo interpretaciones divergentes entre demócratas y extremistas: cuando se creó una Asamblea de municipios vascos éstos últimos pretendieron que tenía tras de sí lo que no concedían al Estatuto. Aun así provocó una inmensa esperanza, acompañada también de graves temores en una parte de la población, que se tradujeron en los resultados electorales. En las elecciones vascas de octubre de 1998 EH subió tres escaños que perdieron los nacionalistas moderados. Unos y otros obtuvieron el 54% del voto que era el porcentaje más bajo desde 1980 en elecciones autonómicas pues, al mismo tiempo, el PP creció.

En mayo de 1999 tuvo lugar el único encuentro entre los representantes del gobierno y los de ETA. Fue un completo diálogo de sordos pues mientras unos ofrecían paz

por presos los otros insistían en soberanía; muy poco tiempo después uno de los emisarios de ETA fue detenido. Con el paso del tiempo el mantenimiento de la violencia callejera y la crispación alentada por algunas declaraciones provocó una seria confrontación en la sociedad vasca y también en la española. En las elecciones municipales de junio de 1999 el PNV perdió el ayuntamiento de Vitoria y la Diputación de Álava. En noviembre de 1999 ETA volvió a la violencia después de negarse los nacionalistas democráticos a aceptar la propuesta de HB para un parlamento constituyente con una circunscripción única. Pero PNV y EA, por otra parte, parecen haber pensado que la vuelta a la violencia no estaba consolidada o que era posible separar a HB, ahora con las siglas EH, de ETA. Aun así en enero del 2000 se produjo un nuevo atentado a partir del cual los nacionalistas democráticos declararon en suspenso el pacto de gobierno pero sin desdecirse del pacto de Estella. Sólo la confirmación de que la senda terrorista era irreversible acabó por distanciar definitivamente a los nacionalistas demócratas de HB. En el ínterin, sin embargo, se había generado una crispación abrumadora en la sociedad vasca y otra paralela en la española.

Al menos resulta necesaria una referencia mínima a las otras dos nacionalidades históricas. Las relaciones del gobierno del PP con el catalanismo han sido las de un matrimonio de conveniencia en absoluto guiado por la pasión. También en la política catalana la inminencia de la desaparición del fuerte e irrepetible liderazgo de Pujol y una radicalización del mundo nacionalista ofrecían un panorama de cambio, aunque de momento permaneciera tan sólo en el horizonte. En el caso gallego, en cambio, empezó a plasmarse. Las paradojas del caso gallego residen en que el gobierno siempre ha permanecido en manos de una derecha que nació antiautonomista pero que ha acabado por serlo mientras que el nacionalismo es casi exclusivamente de izquierda en una sociedad en que la derecha resulta predominante. Sin embargo, al moderarse, a la altura de 1997 llegó a convertir al PSOE en tercera fuerza política en el parlamento gallego.

5. Una etapa de la política española

Cualquier etapa de gobierno deja como resultado el balance de unas políticas de resultados más positivos y de otras que lo son menos; también en algunos puntos concretos suele dejar como herencia un cambio de mayor importancia hasta el punto de que quienes suceden a un gobierno necesariamente tendrán que partir de los presupuestos que éste ha dejado.

En el balance positivo de la experiencia del partido popular en el gobierno entre 1996 y 2000 hay que empezar por situar la política económica y social. La evolución económica fue tan positiva durante este cuatrienio que incluso puede hablarse en determinados terrenos como la inversión en el exterior de un auténtico hito histórico. El ciclo de crecimiento y de creación de empleo, iniciado en la época socialista, se caracterizó durante la etapa de gobierno del PP por una estabilidad macroeconómica especialmente laudable en lo que respecta a la disciplina del sector público y a la fiabilidad de la política antinflacionista. En este terreno lo peor fue la manera en que se llevaron a cabo las privatizaciones hasta constituir un nuevo núcleo de poder económico mientras que el proceso de liberalización resultó, por el contrario, lento y escaso. En política social contribuyó a que se crearan dos millones de puestos de trabajo nuevos aunque la tasa siguiera siendo superior a la europea. Las lagunas fueron el aumento de la siniestralidad laboral, la carencia de suficiente protección familiar, la deficiente política sanitaria y una actitud decepcionante y caótica actuación respecto de la ley de emigración. Contrariamente a lo que en principio podía pensarse la llegada de la derecha al poder no tuvo como consecuencia una multiplicación de la conflictividad laboral.

Sin que pueda ser calificado el balance como completamente negativo hubo otras cuestiones en que la gestión del PP puede calificarse como neutra o tan sólo regular. En la cuestión vasca no tuvo el protagonismo principal pero cabe reprocharle la voluntad de exasperada confrontación y la pasividad expectante con la que contempló el proceso de paz que una parte de la sociedad vasca vio con esperanza. En cambio la política del Ministerio del Interior merece un juicio positivo. En política exterior hubo continuidad pero el peso de España resultó decreciente, la penetración económica en Iberoamérica careció del debido complemento cultural y se cometieron errores respecto a Cuba y Chile. Hubo materias, en fin, en que el gobierno simplemente no se hizo presente aunque ésa hubiera debido ser su responsabilidad y así figuraba en su programa. Poco se avanzó respecto del nivel de calidad de la democracia española, aunque no aparecieran casos estrepitosos de corrupción como al final de la época socialista; tampoco hubo un serio intento de enfrentarse con la vertebración definitiva de la España plural.

En otros terrenos la gestión gubernamental dejó mucho que desear. La primera etapa de Gobierno del PP en Justicia dejó como resultados una casi huelga de jueces, una casi dimisión del presidente del Consejo del Poder Judicial y un grave

deterioro de la fiscalía cuando el propósito hubiera debido ser despolitizarla. El juicio tampoco puede resultar nada positivo en materias educativas y culturales en que la gestión se desarrolló entre la ignorancia y la conflictividad provocada por una manifiesta sobrecarga ideológica. Pero en el área en que el PP estuvo más lejos de cumplir lo que había prometido durante la campaña fue la relativa a los medios de comunicación. Una TVE cuyos espacios informativos rondaban el bochorno multiplicó su deuda por tres y banalizó hasta el extremo los contenidos. Se consiguió, en fin, hacer nacer una cadena de medios de comunicación afín al poder a partir del capital de grandes empresas privatizadas como Telefónica.

Finalmente para establecer un balance de la presencia de la derecha en el poder hay que tener en cuenta también otra realidad. Cualquier partido político democrático que llega al poder hace políticas de continuidad en algunas materias mientras que en otras lleva a cabo rupturas de mayor o menor importancia. Pero también durante su gestión se producen, en parte por su voluntad pero también debido al cambio social, nuevos planteamientos de carácter global que quedan como herencia para sus sucesores. Las privatizaciones fueron iniciadas por el PSOE pero se consolidaron en esta etapa. Sin embargo el cambio de cultura política se apreció sobre todo en materias como la fiscalidad. Por otra parte la ventaja fundamental de los pactos suscritos en materias sociales fue acercar los puntos de vista de los partidos de modo que nunca ha habido como a partir del año 2000 un parecido semejante en los propósitos de los dos grandes grupos políticos. Y, en fin, el milenio, como consecuencia más de la madurez de la sociedad española que de la acción del gobierno, concluyó de una forma antagónica a como se había iniciado. Si el pesimismo fue el rasgo predominante del 98 el tercer milenio se inició con unos auspicios de reafirmación y de conciencia de lo mucho que podía hacer la sociedad española por sus propios medios.

Sin duda todo ello contribuye a explicar los resultados electorales del año 2000. De acuerdo con lo ya señalado acerca de las encuestas de opinión bien puede decirse que todo convertía en probable la victoria del PP y nada hacía pensar que pudiera ser por mayoría absoluta. Si en las elecciones éste fue el resultado se explica principalmente por la campaña electoral.

Lo más sonado –e inesperado– de ella fue la propuesta de un pacto a IU por parte de los dirigentes del PSOE que tan sólo fraguó en febrero en una solución

parcial: alianza para el Senado y coincidencia en un programa de once puntos susceptible de interpretaciones divergentes. En realidad no existían demandas por parte de la sociedad española para que este tipo de acuerdo se llevara a cabo como no fueran en una parte del electorado socialista o en los militantes de este partido más deseosos de presentar como susceptible de victoria la candidatura de Almunia. En concordancia con esta actitud el PSOE durante la campaña dio la sensación de no acabar de creerse los buenos datos que ofrecía la realidad española e hizo interpretaciones demasiado catastrofistas sobre ella. Por su parte la derecha hizo, en cambio, una buena campaña ayudada por las realidades existentes, fueran consecuencia o no de su labor en el gobierno. El factor decisivo que explica los resultados electorales fue el divergente grado de movilización existente en los dos grandes sectores ideológicos de la sociedad española. Temerosa de un supuesto Frente Popular la derecha y centro-derecha se movilizaron mucho más mientras que no lo hizo la izquierda o centro-izquierda a quien se presentó una descripción de la situación vigente que no respondía a la realidad que percibía con sus ojos. Por más que Almunia hubiera logrado neutralizar la desunión de la izquierda que se había producido desde comienzos de los noventa su esfuerzo para movilizarla fracasó por su candidatura al gobierno.